

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitres (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **LUZ STELLA ARIAS OSORIO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S.A), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-021-2020-00266-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos,

1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la nulidad y/o ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata la actora, que se nació el 26 de marzo de 1966, y que que inició cotizaciones al RPM aministrado por el extinto ISS desde abril de 1986 hasta diciembre de 1999, y posteriormente se trasladó del RPM al RAIS a través de la AFP PROTECCIÓN S.A el 04 de agosto de 1995.

Aduce que PROTECCIÓN S.A., no le suministró información consistente en la edad mínima y en el saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual, es decir, con qué IBC debía cotizar con el fin de obtener una pensión anticipada o completar el capital para poder acceder a una pensión de vejez digna, ni tampoco le informó a qué edad se le redimía el bono pensional, es decir, que no le informaron de manera clara,

precisa y veraz los alcances de su traslado de régimen y tampoco le ofreció la doble asesoría.

Sostiene que, los asesores de PROTECCIÓN S.A. le informaron que al afiliarse en dicho fondo privado se pensionaría antes de la edad requerida en el ISS esto es, antes de los 55 años de edad y con una mesada pensional superior a la que le reconocería en su momento el seguro social, además que el promedio para la liquidación y el monto de la pensión sería igual o mejor que la de COLPENSIONES, también le manifestaron que el ISS tendía a desaparecer.

Expone que los asesores o promotores de PROTECCIÓN S.A. en ningún momento le suministraron la información adecuada, suficiente, clara, comprensible y cierta en relación al traslado. Tampoco le informaron el saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual para poder obtener una pensión anticipada; nunca le realizaron una re asesoría y menos la doble asesoría, tampoco le hicieron un estudio previo, individual y concreto en que le aclaran las ventajas y desventajas que con llevarían permanecer o trasladarse del régimen.

Expresa que intentó infructuosamente regresar al RPM administrado hoy por COLPENSIONES, realizando derecho de petición ante dicha entidad mismo que resuelto desfavorablemente, negándole dicho traslado en razón a que COLPENSIONES argumenta que no cumple con los requisitos de la sentencia SU 062, y además cuenta con menos de diez años para cumplir con la edad para jubilarse.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

El *a quo* despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado de la demandante del RPM al RAIS y así mismo declaró la afiliación sin solución de continuidad en el RPM.

En consecuencia ordenó a la AFP PROTECCIÓN S.A., a trasladar a COLPENSIONES, y a esta a recibir, los saldos de la cuenta de ahorro individual del de la demandante, incluidos los rendimientos financieros y los saldos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

En igual sentido condenó PROTECCIÓN a trasladar a COLPENSIONES las cuotas de administración, y las sumas del seguro previsional, descontados de los aportes realizados en favor de la demandante, durante todo el tiempo que está estuvo afiliada en el RAIS.

Para fulminar condena, el a quo argumentó que era obligación del fondo privado brindar una adecuada, suficiente y veraz asesoría que incluso desanimara al usuario del traslado incluso si no le convenía.

Señala que el fondo privado estaba obligado a demostrar en el presente proceso que si brindó esa adecuada, veraz y suficiente información y no lo hizo, sin importar que se trata de una obligación imposible de cumplir y es por ello que en consecuencia presume el incumplimiento del deber de información por parte del fondo privado, y por ello arguye que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional que se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes, determinando e informando la conveniencia e inconveniencia de uno y otro régimen y la carga de las AFP de demostrar que efectivamente entregó la debida información al afiliado al momento del traslado.

Seguidamente expuso que en el presente proceso no se probó por parte de la AFP demandada que haya cumplido con su deber legal de otorgar una explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas, resultando insuficiente como prueba de la existencia de ese consentimiento informado la suscripción del formulario de afiliación, por lo que consideró que existe mérito para acceder a las pretensiones y declarar la ineficacia del traslado de la demandante a PROTECCIÓN S.A en el año 1994.

Arguye que el incumplimiento del deber de información por si solo no resulta suficiente para efectos de declarar la ineficacia del traslado, porque las condiciones pensionales futuras de la demandante, que hoy en día demuestran que resultan perjudica con el traslado de régimen no necesariamente se evidenciaban al momento del traslado, considera que las condiciones pensionales dependían de una cantidad de hechos completamente inciertos y que no estaban bajo el control de PROTECCIÓN S.A.

Aduce que la causal del artículo 272 de la Ley 100 de 1993, establece que cuando se menoscabe la dignidad humana o los derechos de los trabajadores no tendrá aplicación el Sistema Integral de Seguridad Social, y en su lugar se deben aplicar los principios mínimos fundamentales del artículo 53 de la Constitución Política. Sostiene que el Código Sustantivo del Trabajo consagra la ineficacia de los actos que afectan el mínimo de derecho.

Manifiesta que lo anteriormente expuesto lleva a declarar la ineficacia de régimen pensional, es decir, a inaplicar la prohibición de traslado de régimen que tiene la demandante según lo señalado en la Ley 797 de 2003.

Finalmente declaró probada la excepción de ausencia de prueba del vicio en el consentimiento y no probadas las demás. Así mismo señaló que las costas serán asumidas por PROTECCIÓN S.A. para lo cual se fijó las agencias en derecho a favor de la demandante y absolvió de las mismas a COLPENSIONES.

3. DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN:

La sentencia fue apelada por la apoderada de PROTECCIÓN S.A., específicamente en los puntos en que se le condenó a trasladar los conceptos de comisiones de administración y seguro previsional, indicando que son descuentos que se encuentran debidamente autorizados en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003 en su artículo 7º y el mismo se realizó en su momento con la autorización normativa como se realiza frente a cualquier entidad administradora de pensiones.

Señala que dicho descuento también se realizó en su momento como contraprestación a una buena administración de los recursos depositados por la demandante, lo cual se puede evidenciar con los rendimientos financieros que generó la cuenta de ahorro individual de la actora, pues dicha cuenta generó un rendimiento de un 143%, esto de conformidad con el certificado de cuenta de ahorro individual que obra dentro del expediente.

Manifiesta que no hay lugar a devolver los dineros ya pagados por seguros previsionales en razón a que los mismos ya se cancelaron a una aseguradora ajena a PROTECCIÓN S.A. y al condenarse a PROTECCIÓN S.A. a devolver dichos dineros de su patrimonio se estaría generando una condena en perjuicio y mas cuando no fueron solicitados con la presentación de la demandan, así las cosas considera que se debe de hablar de prestaciones acaecidas, teoría que fue puesta de presente por la misma CSJ en su SL con la sentencia de radicado 31989 de septiembre de 2008, Magistrado Ponente Eduardo López Villegas. Precisa que además debe tenerse presente que frente al cobro del 3% destinado para los gastos de administración opera la prescripción por ser un concepto de tracto sucesivo causado por la peridiosidad que impone la Ley, y aduce que el concepto de gasto de administración es un concepto que ni siquiera financia directamente la prestación económica por vejez .

Por lo anteriormente expuesto solicita al Tribunal Superior de Medellín que revoque la sentencia de manera parcial, en lo concerniente al traslado de los gastos de administración toda vez que se trata de prestaciones ya acaecidas.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el apoderado judicial de COLPENSIONES allego escrito de alegatos de conclusión, en los que señaló resumidamente que solicita revocar la sentencia de primera instancia pues no hay lugar a que se declare la nulidad o ineficacia del traslado de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PRIVADA ni a que se declare la afiliación a COLPENSIONES, en la medida que se pretende invalidar un acto que no solo fue válido, sino que produjo efectos jurídicos en tanto que la demandante efectuó aportes al RAIS, por lo que no es posible derivar obligaciones a cargo de Colpensiones. Es preciso considerar que la afiliación a las AFP PROTECCIÓN S.A., se efectuó en el ejercicio legítimo de la demandante del derecho a la libre escogencia del régimen pensional, según lo preceptuado en el artículo 13 en su literal b) de la Ley 100 de 1993, sin que por ello pueda predicarse la existencia de un error por vicio del consentimiento, pues su elección se hizo manifiesta al momento de solicitar la vinculación a la Administradora seleccionada.

Se señala que existe FALTA DE INTERES EN SU VIDA PENSIONAL por la parte activa, pues en el RAIS la pensión es el resultado del ahorro acumulado durante la etapa productiva del afiliado –aportes más rendimientos generados-, que se deposita en una cuenta individual, a nombre de su titular. Dicho afiliado puede solicitar su pensión a cualquier edad o al momento de cumplir la edad de pensión, siempre y cuando disponga de un capital suficiente para financiar una pensión igual al 110% del salario mínimo legal vigente. El monto de la pensión no tiene tope máximo y depende del ahorro acumulado por el afiliado en la cuenta individual.

Es así que sí el afiliado interactúa de forma proactiva con el fondo de pensiones, como por ejemplo al realizar cotizaciones voluntarias, o usando las diferentes modalidades para el uso de los ahorros que ofrecen estos fondos, pueden alcanzar por ejemplo la pensión a más temprana edad, ya que este régimen les permite incrementar sus saldos en la cuenta de ahorro individual que les permitirá luego financiar su pensión estos son algunos beneficios que tiene el régimen de ahorro individual sobre el régimen de prima media, que dan lugar a considerar que es un régimen benévolo con sus afiliados, de una selección voluntaria y libre en busca de un mayor enriquecimiento económico de acuerdo al mercado de valores u optimización en el tiempo de adquirir la pensión.

Es por lo anterior que se señala que podríamos estar no ante una falta de asesoría o un error en el consentimiento, toda vez que la asesoría que señala la parte actora no es falsa, sino que estamos frente a una falta de interés, poca interacción o negligencia por parte de la parte actora en su vida pensional que, si no hubiera existido, hubiera accedido a su pensión con los beneficios señalados por la AFP.

Frente a la inversión de la carga de la prueba se debe señalar que la afiliación y/o traslado de régimen de la afiliada, ocurrió estando en vigencia el Decreto Ley 663 del 02 de abril de 1993 y antes de 2009, año en el que se expide la Ley 1328 por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. Por lo que para la fecha del traslado solo se exigía a las Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías, atender el formulario con el lleno de los requisitos que para los efectos preveía la entonces Superintendencia Bancaria, a fin de demostrar la aceptación y consentimiento por parte de aquel (esto frente al tema de la prueba aportada y no frente a la obligatoriedad de la buena asesoría), diciendo lo anterior se tiene que imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible.

Ahora es claro que el entendimiento entre el RPM y el RAIS sugiere que los afiliados sean debidamente asesorados dado que hay aspectos técnicos que los diferencian, sin embargo, esta regla no puede interpretarse como una situación universal que desplace las situaciones de cada caso particular y que además invierta la carga de la prueba sin mayor análisis que la naturaleza experta que tiene la administradora de pensiones.

Este contexto tampoco puede desconocer escenarios donde la expectativa pensional, la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la calidad de la demandante y otros relacionados con las actividades financieras que ejecuta un usuario durante su vida laboral, le permitía escoger acertadamente el régimen pensional. Este último aspecto ha sido por ejemplo evaluado por la corte Suprema tratándose de afiliaciones tacitas donde prevalecen las actividades, cotizaciones y movimientos financieros a lo largo de la vida laboral.

En razón de lo anterior, podemos colegir sin lugar a equivoco que, en lo atinente a la carga de probar los supuestos de hecho narrados en el acápite fáctico del escrito de demanda, estos deben de estar a cargo de la demandante, pues la AFP cumplió con las atribuciones legales vigentes y aplicables para el momento de la afiliación de la

parte actora, y en razón a los principios rectores de equidad y solidaridad, imponerle una carga adicional, más allá del formulario de afiliación, pues con ello se acentuaba el consentimiento y aceptación por el afiliado, sería una carga desproporcionada e IMPOSIBLE de cumplir.

5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelacion de PROTECCIÓN S.A, se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado de la demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del

artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a las afiliadas o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)
2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

Es así como, en el presente asunto, está probado, que la actora, estando afiliada al régimen publico administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, según la historia laboral emitida por el ISS que reposa a folios 39 a 40 del expediente (Documento 02 del expediente digital), se afilió a la administradora del RAIS PROTECCIÓN S.A. el 24 de agosto de 1995 como se advierte en el formulario de afiliación a dicho fondo que milita a folio 58 del plenario (Documento 02 del expediente digital).

De otra parte, en este caso, si bien la demandante no es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no contar para el 1º de abril de 1994 con 35 o más años de edad o 15 años de servicio, ello no es óbice para que PROTECCIÓN S.A. en el año 1995 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; sobre todo **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto en el RAIS.**

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:12:39 del video de la audiencia de conciliación y trámite (documentos 19 del expediente digital), no se advierte que, esta haya confesado que al momento de su traslado de régimen se le ilustró sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, conforme lo señaló el *a quo*, para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción pre impresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual no probó la AFP, siendo su carga, como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada, por lo que habrá de confirmarse en esta instancia la decisión de el *a quo* de declarar ineficaz el traslado de régimen pensional realizado por la demandante en el año 1995 cuando se trasladó del RPM administrado en ese momento por ISS hoy COLPENSIONES a la AFP PROTECCIÓN S.A.

De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES, encuentra la Sala que la orden impartida por el *a quo*, no se encuentra acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia, y por tal razón, la devolución que debe realizar PROTECCIÓN S.A. a COLPENSIONES deberá incluir la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro de

Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole, pues al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este** y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido la AFP demandada como cotización de la demandante, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba la actora antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a

partir de cuándo le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”

Así mismo, y contrario a lo manifestado por el apoderado de PROTECCIÓN S.A en recurso de alzada, al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe **o de una buena gestión en la administración del bien**, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de la AFP demandada, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, la que acarrea como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deban asumir con su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

De otra parte, respecto de la prescripción de las cuotas de administración, ella no opera, toda vez que la obligación de restituirlas estos se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de las sentencias que la declaran, por lo que no sería procedente la prescripción de las cuotas de administración.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia consultada será CONFIRMADA y ADICIONADA en los términos anteriormente expuestos.

COSTAS en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A por haber salido vencida en el recurso de apelación interpuesto. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000 de la que responde la AFP en un cincuenta por ciento.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral **SEGUNDO** y **TERCERO** de la sentencia del 07 de marzo de 2022 proferida el JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **LUZ STELLA ARIAS OSORIO** contra **COLPENSIONES** y **PROTECCIÓN S.A.** en el sentido que **PROTECCIÓN S.A.**, debe devolver a Colpensiones la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole.

En lo demás se CONFIRMA la sentencia de primera instancia, pero por las razones expuestas en esta instancia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de **PROTECCIÓN S. A** en favor de la demandante. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1'160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **469011a1f1bccb6e4804e20ea6ca44ad501ee0414dae7698ea7eee7438a4d4b7**

Documento generado en 16/03/2023 02:06:45 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>